JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., siete de febrero de dos mil veinticuatro.

Acción de Tutela No. 110014003 065 2023 01154 01.

Decide el Juzgado la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela proferido el 25 de septiembre de 2023 proferido por el Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá, hoy 47 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad, en la acción de tutela promovida por NILSA MERCEDES CASTRO GONZÁLEZ, contra EPS SANITAS S.A.S.; en la que fueron vinculados ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –ADRES-, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD y DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretende la accionante Castro González el amparo de sus garantías fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social; y, solicitó en consecuencia, se ordene a la EPS accionada autorizar y suministrar el insumo de “silla de ruedas” con las especificaciones ordenadas por el médico tratante.

1.2. Como fundamento fáctico expuso, en síntesis, que tiene 71 años y se encuentra afiliada a Sanitas EPS en el régimen subsidiado, siendo diagnosticada con *“G819 HEMIPLEJIA, NO ESPECIFICADA. R268 OTRAS ANORMALIDADES DE LA MARCHA Y DE LA MOVILIDAD Y LAS NO ESPECIFICADAS (entre otras)”*. Por esa razón, el 14 de junio de 2022 el especialista en fisioterapia le prescribió el insumo denominado *“SILLA DE RUEDAS PLEGABLE A LA MEDIDA DE LA PACIENTE, MANILARES DE PROPULSION POR TERCEROS, CON APAOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO REMOVIBLES, Y APOYA PIES AJUSTABLES ALA ALTURA Y REMOVIBLES BIPODALES. SISTEMA DE FRENOS PARA SER ACCIONADO POR CUIDADOR EN MANILLARES, LLANTAS TRASERAS DE 16 PÚLGADAS SIN ARO PROPULSOR Y DELANTERAS DE 8 PULGADAS SOLIDAS. CINBTURON PELVICO COJIN BASICO”*.

Sin embargo, al solicitar la autorización del insumo, la convocada negó su suministro, aduciendo no estar incluido en los criterios de financiación con recursos públicos del sistema de salud, determinación que estima desconsiderada

frente a la afectación de salud que padece, pues no cuenta con los recursos para adquirirlo, viendo vulnerados sus derechos fundamentales invocados.

2. EL FALLO IMPUGNADO

El Juzgado de primera instancia sintetizó el fundamento fáctico y procesal de la acción constitucional, realizó un análisis legal y jurisprudencial sobre el derecho a la salud, y halló mérito para que el juez constitucional adopte medidas extraordinarias para la salvaguarda de los bienes iusfundamentales de la accionante.

Al abordar el caso en concreto, encontró que el diagnóstico de la paciente se encuentra acreditado con la documental aportada al expediente, lo que evidencia su condición de discapacidad, por lo que le fue ordenada, por el médico tratante, la silla de ruedas que reclama con esta acción. Y, aunque la EPS Sanitas manifestó que el insumo no se encuentra dentro de las coberturas del Plan de Beneficios en Salud, lo cierto es que, con las pruebas allegas se advierte la necesidad de su suministro, con las especificaciones prescritas.

Por lo tanto, la tardanza de parte de la convocada en la autorización y entrega de la silla de ruedas no tiene justificación, pues existiendo orden médica que la otorgue, no puede sustraerse de su cumplimiento. En ese sentido, concedió el amparo deprecado y ordenó a la EPS accionada *“...en el término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de éste fallo, autorice la silla de ruedas que requiere la accionante, en la forma y especificaciones ordenadas por el médico tratante y adopte las medidas administrativas correspondientes para la importación, adquisición o fabricación del insumo, garantizando la entrega de la misma a la accionante en el término máximo de dos (2) meses, conforme se precisó en la parte motiva de este fallo”*.

3. LA IMPUGNACIÓN

En tiempo, la SANITAS E.P.S impugnó la sentencia de primera instancia, manifestando, en síntesis, que no ha incurrido en vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, pues no se evidencian negaciones o barreras de su parte, frente a la prestación de los servicios de salud requeridos por la paciente.

Frente a la silla de ruedas ordenada, señaló que no se encuentra contemplada dentro de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud (PBS), ni corresponde a un servicio de salud, pues es solo una ayuda a la movilidad de la paciente, y no un mecanismo para la recuperación de su salud. Por esa razón, no puede ser financiado con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y por tanto, no es posible el suministro ordenado por el *a quo*.

Además, que el tiempo de elaboración de la silla lo determina el proveedor seleccionado, y depende de los requerimientos médicos del paciente; así las cosas, el tiempo puede ser mayor respecto de la fabricación de una silla estándar, sin embargo, por regla general tarda un lapso de 90 días.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Sea lo primero señalar, que conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

4.2. En lo que respecta al derecho a la salud, conviene mencionar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 49 estableció que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Del mismo modo la Ley 1751 de 2015 refiere que la salud no solo es un servicio público, sino que además es un derecho fundamental autónomo e irrenunciable. El derecho fundamental comprende el acceso efectivo a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. Así mismo, de acuerdo con esta disposición es un deber estatal asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

La Ley 1751 de 2015 establece que la prestación del servicio de salud se rige bajo el principio de integralidad (cfr. art. 8). Bajo su amparo, los servicios y tecnologías de salud son suministrados de manera completa, con independencia

del origen de la enfermedad o condición de salud y sobre todo del cubrimiento o financiación definido por el legislador. Concordante con ello, el art. 10 ibídem estableció como derecho de las personas el no ser sometidos en ningún caso a tratos crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser obligados a soportar sufrimiento evitable, ni obligados a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento.

Asimismo, la Corte Constitucional, ha sostenido que *“...el derecho a la salud es un derecho fundamental y tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo.”*¹ Adicionalmente, *“el servicio de salud debe prestarse de manera oportuna, eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad, integralidad e igualdad. La prestación del servicio de salud en estos términos se ve limitada cuando se imponen barreras o trabas administrativas por parte de la entidad prestadora de salud, no imputables al paciente. Una de las consecuencias que ello genera es la prolongación del sufrimiento que consiste en la angustia emocional que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser atendidas y recibir tratamiento. Esta clase de conductas generan una grave afectación de los derechos fundamentales no solo a la salud, sino a la integridad personal y a la vida en condiciones dignas”*².

Aunado a lo anterior, debe decirse que en múltiple jurisprudencia constitucional se ha sostenido que los adultos mayores son un grupo vulnerable catalogados como sujetos de especial protección dadas sus condiciones físicas, económicas o sociológicas³. Además, que existe una carga específica en cabeza del Estado, la sociedad y la familia para que colaboren en la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, ya que éstas se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor en comparación con otros individuos⁴. Asimismo, el literal b) del artículo 7 de la Ley 1276 de 2009, establece que es adulto mayor aquella persona que cuenta con 60 años de edad.

4.3. En el caso concreto se encuentra probado que la paciente en la actualidad supera la edad antes referida, pues cuenta con 71 años, por lo que corresponde al juez constitucional brindar un trato diferencial frente a ella, tornándose procedente el amparo deprecado. Asimismo, se puede concluir que, teniendo en cuenta el estado de salud de NILSA MERCEDES CASTRO GONZÁLEZ, el diagnóstico médico que presenta, así como su avanzada edad, la

¹ Corte Constitucional, Sentencia T -737 de 17 de octubre de 2013. M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos.

² Corte Constitucional, T- 423/17, MP. IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO.

³ Sentencia T-252 de 2017

⁴ Sentencia T -252 de 2017

hacen sujeto de especial protección constitucional, situación que no puede desconocerse.

Ahora bien, en lo que respecta a "*SILLA DE RUEDAS PLEGABLE A LA MEDIDA DE LA PACIENTE, MANILARES DE PROPULSION POR TERCEROS...*", es menester indicar que La Corte Constitucional ha dicho que la prestación de los servicios de salud está en principio sujeta al suministro de los insumos y medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy Plan de Beneficios en Salud. Sin embargo, también ha indicado que la protección a la salud procede en los casos en que dicho servicio es necesario, esto es, cuando el médico tratante lo ordena, bajo el entendido de que el medicamento, insumo o procedimiento es indispensable para conservar la vida digna, la salud o la integridad personal del paciente⁵, en condiciones dignas.

En ese sentido, el Alto Tribunal ha entendido que aunque los servicios como los que reclama la actora no se encuentren contenidos en el PBS, y al margen de que como lo sostiene la accionada, no tengan una incidencia directa en la recuperación o cura de la enfermedad de la paciente, estos sí van a permitir que la persona pueda gozar de unas condiciones dignas de existencia, en especial, en enfermedades que restringen la movilidad⁶, condición que está acreditada en la paciente CASTRO GONZÁLEZ; máxime cuando dicho servicio se encuentra ordenado por el médico tratante desde el 06 de julio de 2023, de acuerdo con la orden médica aportada (archivo 04), por lo que el término de 90 días indicado por la EPS para su elaboración y entrega, se observaría ampliamente superado.

Debe tenerse en cuenta que las sillas de ruedas son instrumentos prescritos por razones médicas que tienen como fin menguar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra una persona por una determinada afección clínica y, además, permitir que tenga una vida en condiciones de dignidad humana, más aún, tratándose de un sujeto de especial protección constitucional. Además, que "*las dificultades o eventuales fallas del MIPRES no pueden ser un obstáculo para el acceso efectivo e integral de los servicios ordenados a un paciente por su médico tratante. Son las EPS quienes deben acatar la orden médica sin dilación alguna y posteriormente iniciar los trámites a que haya lugar ante el Ministerio de*

⁵ Sentencia T-520 de 2012

⁶ Sentencia T-579 de 2017

Salud y Protección Social y/o ante la ADRES para obtener el recobro de los gastos incurrido⁷.

5. CONCLUSIÓN

En estas condiciones la sentencia impugnada habrá de confirmarse, pues es del resorte de la entidad promotora de salud convocada, a juicio constitucional, autorizar y suministrar la “*silla de ruedas*” ordenada por el médico tratante, con las especificaciones por él señaladas, a favor de la paciente CASTRO GONZÁLEZ.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

6.1. Confirmar la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2023, proferido por el Juzgado 65 Civil Municipal hoy 47 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

6.2. Notificar esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. Remitir las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

⁷ Sentencia T-061 de 2019

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f35974d9f524a723b1eaef0f44d419f2d0f5ab4b8972fa0905abfcf0879e4eb6**

Documento generado en 07/02/2024 12:12:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>